



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Auto interlocutorio No. 358

MAGISTRADA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

MEDIO DE CONTROL	Nulidad y restablecimiento del derecho -Ley 1437/laboral-
PROCESO	76001-33-33-011-2016-00111-02
DEMANDANTE	Ricardo López Arena <a href="mailto:ancizaroga@gmail.com">ancizaroga@gmail.com</a> <a href="mailto:rodriguezcaldasabogados@gmail.com">rodriguezcaldasabogados@gmail.com</a>
DEMANDADO	Policía Nacional <a href="mailto:deval.notificacion@policia.gov.co">deval.notificacion@policia.gov.co</a>
PROVIDENCIA	Auto decreta pruebas

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

El Despacho decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto **No. 1153 del 23 de noviembre de 2020**, proferido por el Juzgado 11° Administrativo de Cali, que negó el decreto de unas pruebas.<sup>1</sup>

II. ANTECEDENTES

El 5 de mayo de 2016 el señor Ricardo López Arena presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional para que se declare la nulidad del acto administrativo que no recomendó su nombre para curso de capacitación para el ascenso al grado de coronel.

III. PROVIDENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN

Mediante auto del 23 de noviembre de 2020 el juzgado dictó sentencia anticipada y se abstuvo de decretar las pruebas documentales pedidas en la demanda por innecesarias, además de que no fueron pedidas por derecho de petición:

*“(…) si bien es cierto la parte actora solicitó varias pruebas documentales, considera el despacho que las mismas resultan **innecesarias** toda vez que se cuenta con otros medios probatorios suficientes para resolver el fondo del asunto (…) Amen que, frente a la solicitud de prueba documental, no se acreditó*

<sup>1</sup> El juzgado concedió la apelación por auto del 15 de junio de 2022 y el reparto al Despacho para resolver la apelación ocurrió el 5 de agosto de 2022

*que hubiere solicitado previamente a la entidad demandada dichos documentos a través del **derecho de petición***". (Se destaca en negrilla).

Inconforme, el demandante apeló porque las pruebas negadas fueron solicitadas a la entidad demandada a través de derecho de petición, pero la respuesta fue incompleta:

*"El auto recurrido es restrictivo del acceso a la administración de justicia y del debido proceso, si bien es cierto que hay material probatorio, la parte actora fue acuciosa y solicitó por derecho de petición las pruebas y las respuestas aportadas no fueron suficientes ni claras, razón por la cual a más de decretar las pruebas aportadas se deben decretar las pruebas solicitadas"*.

#### **IV. CONSIDERACIONES**

El Despacho es competente para decidir el recurso de apelación porque el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, dispone que no debe resolverlo la Sala. De otra parte, el artículo 243, numeral 7 de la Ley 1437 de 2011 dispone que es un auto susceptible de apelación porque negó el decreto de pruebas.

##### **1. Problemas jurídicos**

¿Las pruebas que el juez rechazó son necesarias?

¿Las pruebas que el juez rechazó habían sido solicitadas mediante derecho de petición? En caso negativo, pese a ser una obligación, ¿impide al juez decretarlas?

##### **2. Tesis**

Las pruebas rechazadas son necesarias porque constituyen los antecedentes administrativos del acto demandado. No se demostró que la parte interesada las hubiera pedido mediante derecho de petición, cuando era obligatorio hacerlo según el artículo 78.10 del CGP. Sin embargo, esta carga procesal debe atemperarse al caso concreto y ponderar la idoneidad y relevancia de la prueba omitida que se pide decretar en sede judicial, para no incurrir en excesivo ritual manifiesto que sacrifique el derecho sustancial de la parte o haga imposible un pronunciamiento de fondo a costa de la conducta omisiva del apoderado. Igualmente, debe considerarse si la prueba objeto de discusión se circunscribe a la obligación de la entidad pública demandada de aportar las pruebas que tiene en su poder. Se revoca el auto revisado.

Sobre el decreto de pruebas el Código General del Proceso establece:

*-“ARTÍCULO 78. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados:*

*(...)*

*10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”.*

*“ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.*

*-“ARTÍCULO 173. (...) En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite**, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. (...)”.* (Se destaca en negrilla).

Por su parte, el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 impone a la entidad pública demandada la obligación de aportar, con la contestación de la demanda, *“el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder”.*

Dicho lo anterior, cabe precisar que las pruebas documentales negadas son necesarias porque constituyen los antecedentes administrativos del acto administrativo demandado. Son de tal relevancia que su ausencia haría imposible un pronunciamiento de fondo, pues su contenido es el que permitiría verificar las aparentes irregularidades del acto demandado como inconsistencias en la evaluación de desempeño del demandante y falsa motivación. Las pruebas negadas son, entre otras:

-Actos que contienen los motivos por los cuales no fue recomendado para el curso de ascenso.

-Sistema de evaluación para ser recomendado al curso de ascenso.

-Evaluación de trayectoria profesional.

No obra prueba en el expediente acerca de que el demandante las hubiera solicitado a la Policía Nacional lo que, en principio, impide al juez decretarlas. Sin embargo, la Policía Nacional, como entidad demandada, estaba en la obligación de aportar las pruebas que tenga en su poder

constitutivas de los antecedentes administrativos del acto demandado, pero no lo hizo.

A pesar del incumplimiento de las cargas procesales de ambas partes, insistir en rechazar esta prueba por estas irregularidades es sacrificar el debate del derecho sustancial en disputa de que es titular el demandante y favorecer un fallo inhibitorio el cual debe evitarse, por lo que se revocará el auto revisado.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR** el auto No. 1153 del 23 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado 11° Administrativo de Cali, que negó la práctica de las pruebas documentales pedidas con la demanda.

**SEGUNDO: DECRETAR** la prueba documental señalada en la parte considerativa que será incorporada por el *a quo* en la oportunidad y diligencia que fije para el efecto.

**TERCERO:** Ejecutoriada la presente providencia DEVOLVER el expediente al juzgado de origen previa anotación en el sistema de gestión judicial SAMAI.

**CUARTO: INFORMAR** a las partes que a partir del 16 de mayo de 2022 el canal oficial para recibir memoriales y escritos será la VENTANILLA VIRTUAL de Samai.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Providencia suscrita electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co> en donde se puede corroborar su autenticidad.



**ZORANNY CASTILLO OTÁLORA**  
Magistrada